



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

Expte n°: 8163/2024 AML

Autos: “BROKER ROBLE S.R.L. c/ AFIP - DIRECCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Sentencia Definitiva del Expte. N° 8163/2024

Buenos Aires,

I.- Llegan las presentes actuaciones a esta Alzada, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la resolución RESOL-2023-10089-E-AFIP-DEIMPR#SDGTLSS, por la que no se hace lugar a la solicitud de revisión presentada por la contribuyente **BROKER ROBLE S.R.L., C.U.I.T. N° 30- 71514862-1**, confirmando la deuda oportunamente intimada y la multa correspondiente, todo ello en el marco de las Actas de Inspección e Infracción labradas bajo OI 1.958.658.

II.- Así, se le notificó a la contribuyente de lo resuelto, informándole que la resolución era susceptible de ser revisada por medio del procedimiento establecido en el punto 8 de la Resolución 79/98 AFIP, o por la vía del recurso de apelación ante esta Alzada.

Conforme se desprende de las presentes actuaciones, la parte actora optó por recurrir a esta instancia judicial, sin dar cumplimiento con el requisito del pago previo establecido por el art. 15 de la ley 18.820.

III.- Así las cosas, corresponde analizar en primer término, si corresponde eximir a la recurrente del principio solve et repete exigido por la normativa precedentemente citada. A tal fin, la recurrente ofrece seguro de caución N° 204537 emitida a favor de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS por la firma INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A. en garantía como sustitución de pago previo de la obligación depósito previsto en el art. 15 de la Ley 18.820, ad 12 de la Ley 21.864 (modificada por la Ley 23.659) y art. 26 de la Ley 24.463.

Compartiendo lo dictaminado por el Sr. Agente Fiscal en autos “Parflik S.A.C.I.F.I.A”(dictamen de la Fiscalía N° 2, de fecha 22/12/93, n° 4935/93) y lo resuelto por este Tribunal en los mismos autos, mediante sentencia de fecha 14/4/94, n°57859/94 y en autos “ Tronchet Pour L Home S.A c/ DGI s/ Impugnación de deuda”, sentencia n° 77225 del 12/06/95 , y por la Sala II del fuero en autos “Club Atlético Vélez Sársfield Asociación Civil c/ DGI , sent. 72.655 del 18.12.98 y por la Sala III en autos “Creaciones Ginesse SAIC c/ DGI”, sent. 68.448 del 17.5.98, el depósito previo que exige el art. 15 de la ley 18.820 para la concesión del recurso importa el



cumplimiento provisional y adelantado de la condena, constituyendo así una razonable medida precautoria impuesta en salvaguardia del interés colectivo comprometido.

En ese contexto, este tribunal entiende que la fianza acompañada, garantiza el pago de las obligaciones reclamadas en las actas en cuestión, por lo que debe eximirse al recurrente de la carga impuesta por el art. 15 de la ley 18.820 y artículo 26 de la ley 24.463, ya que está suficientemente garantizada la obligación.

En sentido análogo se han pronunciado las tres Salas que integran el fuero, entre otras, así como la Sala II en autos “COMPAÑÍA DE SERVICIOS HOTELEROS S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda”, SD. 114.039, la Sala III en autos “TREVES ARGENTINA S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda”, SD. 110.602, y esta Sala I en autos “FRIGORÍFICO GORINA S.A.I.C. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda”, SD. 124.944.

Ello así, corresponde tener por cumplido el requisito exigido por el art. 15 de la ley 18.820, mod. por art. 26 de la ley 24.463 y entrar a considerar el fondo de la cuestión.

IV.- En primer término la recurrente solicita que se declare la nulidad del acto administrativo, ya que considera que carece del elemento esencial que es la fundamentación. Manifiesta que los agentes inmobiliarios que fueron incluidos en las actas de inspección, han sido dados de alta con otros servicios ajenos a la actividad inmobiliaria. Agrega que por Resolución N° 1907/2022 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de fecha 3/03/2022 determinó la inexistencia de vínculo laboral entre los franquiciados y los agentes inmobiliarios. Argumenta que la actividad de la empresa es una nueva metodología de desarrollo que se está desarrollando a nivel mundial y paulatinamente en Argentina. En este contexto, los agentes no deben cumplir horario ni están obligados a concurrir a la oficina del franquiciado, organizan su actividad de manera independiente y por su cuenta y riesgo. Agrega que no poseen exclusividad y pueden contratar sus servicios con terceros ajenos al franquiciado. Efectúa una breve reseña del contrato de agencia tipificado en los artículos 1479 a 1501 dispuestos en el Código Civil y Comercial de la Nación. Considera que mediante el mencionado contrato, un empresario o comerciante comercializa sus bienes y servicios, a través de un agente, quien a cambio de un precio va a promover el negocio, juntando la oferta y demanda y evitando que aquél se ocupe de organizar las ventas. Considera incorrecta la aplicación del principio de realidad económica invocada por el organismo como argumento central de su pretensión fiscal. Hace mención a diversa jurisprudencia que avala el criterio expuesto en la expresión de agravios.

V.- Previo a resolver la cuestión de fondo, corresponde señalar que con relación al planteo que las actas recurridas carecen de los requisitos propios del acto administrativo, es dable destacar que conforme Juan Gilibert, en “ El Derecho a la legítima defensa en el sistema jubilatorio argentino” (L.T, pág. 385/6), las diligencias





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1
que se cumplen con la intervención de los funcionarios competentes y se instrumentan a través de las actas de verificación, que se notifican al interpelado, no reúnen los requisitos esenciales ni generales de un acto administrativo y ello por cuanto no ha mediado una decisión fundada que cause estado, pues hasta tanto no se haya agotado el procedimiento regulado por la ley 18.820 y que da lugar a la ejecución, no es un acto administrativo definitivo, contando el obligado con los medios legales apropiados para demostrar la improcedencia del débito intimado.

Es sólo la conformidad del contribuyente, mediante la no impugnación de las actas, lo que permite al fisco proceder a su cobro, y si, por el contrario, se muestra disconforme con la deuda o infracción, la ley 18.820 pone a su alcance el procedimiento recursivo adecuado para fundamentar sus agravios. Sólo después de una decisión fundada, acto administrativo definitivo, contraria a la pretensión del recurrente, se habilitará a la ejecución fiscal, siempre y cuando no medie apelación ante la Excma. Cámara Federal de Seguridad Social, pues entonces deberá esperarse una sentencia favorable de ésta a los intereses fiscales.

Como consecuencia lógica de lo expuesto, cabe concluir que las actas de inspección e infracción no son más que una constatación que hace la Administración de la situación del contribuyente, por lo que no cabe exigir de las mismas los requisitos propios de los actos administrativos, como tampoco que sean realizadas por juez administrativo, ya que por tratarse de constataciones las mismas pueden ser cuestionadas- tanto la deuda como la multa- y dar nacimiento posteriormente al proceso que nos ocupa. Por todo lo expuesto, corresponde la desestimación del agravio esgrimido por el apelante en este sentido.

VI.- Las presentes actuaciones tienen su origen en una propuesta de trabajo remitida por la Dirección Regional de los Recursos de la Seguridad Social Sur a la Dirección Regional de La Plata, para verificar la operatoria y modalidad de contratación de los agentes colaboradores por parte de las inmobiliarias de la cadena “Remax”.

Así es que el organismo requirió a la contribuyente que exponga como se lleva a cabo la operatoria comercial para la compra/ venta de propiedades. El rol que cumplen los agentes inmobiliarios/vendedores, cómo se componen las comisiones percibidas, detallando en qué proporción se le cobra a la parte vendedera y compradora y qué porcentual perciben los agentes. También se solicitó el listado de los agentes inmobiliarios con los que cuenta.

En este contexto, se vislumbra en el cuerpo de inspección, que el contribuyente acompañó documentación digital, cumpliendo con el requerimiento. También ante un nuevo requerimiento del organismo detalló la fecha de ingreso de cada agente.

Posteriormente se realizó un relevamiento de trabajadores en el domicilio de la empresa, relevándose a cuatro trabajadores que se encontraban desarrollando tareas en



domicilio de la rubrada, lo cual arrojó una inconsistencia con la información obrante en los sistemas de AFIP.

De esta manera el órgano resolutor, llega a la conclusión que las personas que colaboran con la empresa actúan bajo el liderazgo de un corredor público inmobiliario matriculado responsable de cada oficina, generándose un vínculo laboral de dependencia

Entrando a la cuestión a resolver, corresponde señalar que el procedimiento puede ser iniciado de oficio o a instancia de parte, la impulsión de éste corresponde a la Administración, en razón de que con él no tiende a satisfacer simplemente un interés individual, sino un interés público: el administrativo (ver Hutchinson, Tomás “Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549”, pág 29 y ss).

Sin embargo, el organismo fiscal no ha merituado debidamente lo expresado por la parte actora ni la documentación aportada.

La jurisprudencia tiene dicho que hay contrato de agencia cuando una parte (agente) asume de manera estable el cargo de promover, por cuenta de otro (concedente) mediante retribución, desarrollando su actividad con total independencia y autonomía, con sujeción únicamente a las normas contractuales, siendo su gestión unilateral, pues su acción se realiza en favor de una sola de las partes (cfr. C.N.A.Com., Sala A, sent. del 16.02.82, "Pozzo Balbi, Enea c/ Frison Curtiembres S.A.").

El rasgo de autonomía resulta esencial en la tipificación de la figura de la agencia y determina su deslinde respecto de la regulación jurídica de las relaciones de índole laboral, de modo tal que el agente no es un subordinado de su proponente, ya que realiza la actividad encomendada en forma autónoma y a su propio riesgo, sin que a ello obsten las instrucciones a las que suele estar sometidos.

De esta manera, la garantía del debido proceso legal lleva aparejado diversos elementos integratorios para el administrado; el derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a que se dicte una decisión fundada que contemple sus alegaciones y resuelva sus pretensiones.

En este sentido, en los presentes actuados la cuestión se centra en los elementos probatorios ofrecidos por la apelante, y dictar una resolución lo más acorde posible con la realidad de los hechos.

Por lo expuesto, no resultando de las constancias de autos que se hayan arbitrado medidas suficientes para indagar la verdad objetiva de los hechos, ni aplicado criterios de razonabilidad, a fin de que el pronunciamiento produzca efectos jurídicos válidos (cfr. art. 1 incs. a, b c y f de la ley 19.549 y esta Sala en autos “Industrias Metalúrgicas Dino Bartoli c/ Administración Federal de Ingresos Públicos –DGI- s/ Impugnación de Deuda”, sentencia definitiva N° 119.396 del 29/06/06, entre otros), ni logra formar opinión acabada sobre el vínculo laboral que el organismo pretende endilgar, corresponde declarar formalmente admisible el recurso y dejar sin efecto la resolución recurrida ordenando al organismo,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

En similar sentido, se ha pronunciado esta Sala en mayoría, con disidencia de la Dra. Pérez Tognola, en los autos “REMADEX S.A. c/ MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL s/IMPUGNACION DE DEUDA”, sentencia definitiva dictada el 30/10/2023 en el Expte. N° 30052/2023.

VII.- En atención a que el organismo ministerial, no es equiparable con las partes en las contiendas judiciales comunes, sino que actúa oportunamente en defensa del interés general, las costas se imponen en el orden causado (cfr. art. 68 del CPCCN).

La Dra. Victoria Pérez Tognola no vota en virtud de hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE: 1)- Declarar formalmente admisible el recurso interpuesto; 2)- Revocar la resolución recurrida de acuerdo a lo expuesto precedentemente; 3) Imponer las costas en el orden causado (art. 68 segundo párrafo del CPCCN).

Regístrese, notifíquese y oportunamente remítase.

